

VERDAD Y JUSTICIA

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

Argentina

La realidad de nuestro país nos muestra sus rostros de violencia, de intolerancia, de mentira y de injusticia. Son el producto de los ciclos de golpes militares y de gobiernos civiles que hemos vivido.

Es una historia de desencuentros, enfrentamientos, de grandezas y bajezas, de verdades y mentiras. Nadie es dueño de la verdad. Pero sí podemos ser servidores de la Verdad para que la misma sea luz y camino para el presente y futuro de nuestro pueblo.

En este sentido surgen preguntas: ¿cuándo comenzó la violencia en nuestro país?, ¿con la masacre de los indígenas que llevó a cabo el General Roca en la Campaña del Desierto?, ¿con el fusilamiento de Dorrego por Lavalle, en las luchas por la independencia de nuestro país?, ¿con el bombardeo en Plaza de Mayo, en 1955?, ¿con los asesinatos de Monseñor Angelelli y del Padre Mugica?, ¿con las Triple A y los grupos paramilitares y policiales ocultos en la sombra de la impunidad?

Estamos ya a 19 años del inicio de uno de los períodos más difíciles de nuestra vida como país: la dictadura militar que gobernó de 1976 a 1983. En este tiempo transcurrido, de muchas maneras y desde los sectores de poder se procuró cubrir con un manto de silencio y de olvido todo lo ocurrido. Pero esto fue un intento que estaba destinado a fracasar. No se puede establecer el

olvido por decreto.

En los últimos meses las declaraciones de varios integrantes de las Fuerzas Armadas han conmocionado la opinión pública nacional e internacional. Algunas respuestas contribuyen, en alguna medida, a clarificar responsabilidades más recientes, pero no son suficientes.

Es inaceptable que se pretenda responsabilizar a “los argentinos” de los enfrentamientos pasados. No se puede seguir insistiendo en la teoría de los “dos demonios” y la “guerra sucia”. Los niños, los estudiantes, los trabajadores, los religiosos y religiosas que trabajaron por la vida y la dignidad de nuestro pueblo, no son culpables. Hay una diferencia necesaria entre los que diseñaron, ordenaron e implementaron el terrorismo estatal y quienes advertimos y denunciemos los crímenes y tratamos de detener la violencia homicida desatada aún antes del golpe militar de 1976.

Fue probado por la Justicia y es justo decirlo una y otra vez, que el golpe militar de 1976 fue llevado a cabo para imponer por la violencia un modelo de sociedad a través de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las Fuerzas Armadas se transformaron en verdaderas tropas de ocupación con alto costo social en vidas humanas, destrucción del aparato productivo y aumento de la deuda externa.

Esta situación no pertenece al pasado sino que tiene graves conse-

cuencias en diferentes niveles de la vida del pueblo hoy.

Porque a través de mecanismos aberrantes como las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos presidenciales, están en libertad los autores de los secuestros y desaparición de miles de personas. Sus crímenes quedan impunes y sobre esta impunidad es imposible construir un proceso democrático real.

Para las víctimas y sus familiares, así como para la sociedad toda, es necesario lograr el total esclarecimiento de los hechos vividos, y que lo “legal” ceda ante la Etica y la Justicia. Los responsables deben ser removidos de sus puestos y sancionados con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Pero también es cierto que, en nombre de la Verdad que debemos buscar incesantemente si queremos cerrar las heridas, aún profundas, que afectan a nuestro pueblo, debe reconocerse que las responsabilidades no son sólo de las Fuerzas Armadas. Hubo sectores de la sociedad que fueron cómplices de las atrocidades cometidas en contra del pueblo: la llamada “patria financiera”, un Poder Judicial complaciente, sectores de la Iglesia que avalaron la represión.

Tampoco hay que olvidar que, finalizada la dictadura, las leyes elevadas por el entonces Presidente Dr. Alfonsín fueron aprobadas en el Parlamento por legisladores sin